



JORGE CANO

Sin rastro, 256 mil millones para salud, con AMLO

Algo no cuadra en las cifras oficiales. Según ellas, durante el sexenio anterior el gasto público en salud dirigido para las personas más vulnerables promedió 325 mil millones de pesos anuales, su mayor nivel histórico. Pero ¿cómo es posible que en este contexto aumentara el desabasto de medicamentos y hubiera más personas sin acceso a los servicios públicos de salud?

Además de fallas en la planeación y ejecución, la respuesta radica en que buena parte del gasto oficial en salud parece que nunca se concretó.

Según los datos más recientes de la Cuenta Pública, de 2019 a 2024 el Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), creado para financiar enfermedades de alto costo de las personas sin seguridad social, erogó 381 mil millones de pesos. Sin embargo, de ese monto, 256 mil millones —equivalentes al 67.2%— fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (Tesofe), sin que exista información pública que permita rastrear su destino final.

¿Qué significa esto? En términos simples, el Gobierno registró como gasto ejercido en salud miles de millones en transferencias al Fonsabi, pero luego regresó gran parte de esos recursos a la Tesofe, donde ya no fue posible saber realmente en qué se gastó el dinero: un claro esquema de simulación del gasto y posible desvío de recursos. ¿Qué tan grave es? Este monto sin rastro representa el 13% del gasto en salud para las personas sin seguridad social en el sexenio pasado.

Si consideramos que todos los recursos que el Fonsabi regreso a la Tesofe, no se utilizaron efectivamente en salud, tenemos que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador el gasto para las personas sin seguridad social promedió anualmente 283 mil millones de pesos, menos que con Enrique Peña Nieto (313 mil millones).

En teoría, el dinero reintegrado a la Tesofe “puede” ser utilizado para fortalecer acciones relacionadas a la salud pública. Sin embargo, ¿por qué no gas-

tar en sanidad directamente desde el Fonsabi, en lugar de regresar el dinero a la Tesofe, para luego —en el mejor de los casos— mandar el recurso a la Secretaría de Salud (SSA) o al IMSS-Bienestar? No tiene sentido.

Existe un gran riesgo de que ese dinero, supuestamente destinado a la salud, haya sido gastado en realidad en las obras prioritarias del Gobierno, ido a parar a los fideicomisos de los militares o haya servido para financiar otros apoyos sociales.

Lamentablemente, no hay muchas esperanzas de que sepamos realmente dónde quedó ese dinero. Este esquema está avalado por la Ley General de Salud y por la Ley de Ingresos de la Federación (LIIF), por lo cual la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no está obligada a indagar al respecto. Ni hablar de la posibilidad de saber, en el contexto actual, el destino de los recursos mediante mecanismos de acceso a la información.

Lo que podemos saber con datos oficiales es que Fonsabi dejó de financiar de forma prioritaria enfermedades de alto costo como el cáncer o el VIH/Sida. En 2021, último año con desglose de datos disponibles, hubo un recorte de 97% en el financiamiento al cáncer infantil frente al sexenio de Peña Nieto.

También sabemos que el Fonsabi cerró 2024 con sólo 32.3 mil millones de pesos, un recorte de 74% frente a 2018. Es decir, Claudia Sheinbaum heredó un fondo para la salud gravemente disminuido. Esperemos que este esquema de opacidad desaparezca con la nueva administración.

Coordinador del Programa de Gasto
Público y Rendición de Cuentas
de México Evalúa